



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Radicado: 15001 33 33 003 **2019 00112 00**

Demandante: INDEPORTES Boyacá

Demandado: Darío Fernando Díaz Martínez

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago promovido por INDEPORTES Boyacá contra Darío Fernando Díaz Martínez.

I. Antecedentes

La parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra el señor Darío Fernando Díaz Martínez y a favor de INDEPORTES Boyacá, de la siguiente manera:¹:

“Librar mandamiento ejecutivo contra el señor Darío Fernando Díaz Martínez por cuatrocientos doce mil setecientos sesenta y nueve pesos (\$412.769), por las costas procesales liquidadas y aprobadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 15001-33-33004-2015-00196-00 y ordenar su pago a INDEPORTES Boyacá, con la suma adeudada debidamente actualizada desde la fecha de ejecutoria del auto de 22 de noviembre de 2018.”

La demanda fue repartida inicialmente ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, quien mediante auto de 27 de junio de 2019 (f. 61) dispuso su remisión por competencia ante este Despacho judicial, por cuanto el objeto del proceso es la ejecución de las costas impuestas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 15001-33-33-004-2015-00196-00, asunto que se adelantó ante este Estrado Judicial.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Competencia

¹ F.1

En los términos del numeral 6 del artículo 104 y el numeral 9 del artículo 156 del CPACA, así como, lo consagrado en el artículo 306 del CGP², este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de las **costas procesales reconocidas a favor de la entidad estatal, INDEPORTES Boyacá**³, mediante sentencia de 24 de mayo de 2018 (fs. 9-18)⁴, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 15001-33-33-004-2015-00196-00, proceso que se tramitó en primera instancia ante este Estrado Judicial.

De otro lado, en virtud del numeral 7 del artículo 155 del CPACA, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (f. 72).

- **Caducidad**

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde, de conformidad con lo señalado en el literal k numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por cuanto la sentencia cobro ejecutoria el **31 de mayo de 2018** (f. 77). Así las cosas, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **11 de junio de 2019** (f. 3).

- **Del título ejecutivo:**

En los términos del artículo 305 del CGP podrá exigirse la ejecución de las providencias judiciales una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso.

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

² Norma aplicable por remisión normativa dispuesta en el artículo 306 del CPACA, en cuanto a los aspectos no regulados en dicho código, como quiera que se trata de una sentencia que impone una **condena a favor**, y no en contra de la entidad estatal, tal como lo establece el numeral 1 del artículo 297 *ejus dem*.

³ Valores que se liquidaron y aprobaron mediante auto de 22 de noviembre de 2018 (f. 6)

⁴ Sentencia que cobró ejecutoria el día 31 ese mismo mes y año (f. 77).

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado señaló que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 422 del CGP), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido que los documentos integrantes del título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.⁵

Bajo las anteriores precisiones, es pertinente señalar cuáles son los documentos que integran el título ejecutivo, que para el caso que nos ocupa es un título ejecutivo complejo.

Así las cosas, cuando se ejecuta con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencien la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP.

En este caso, tenemos que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia del 11 de julio de 2016 (fs. 19-40), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 3333 004 2015 00196 00, providencia que fue confirmada por H. Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de fallo de segunda instancia de 24 de

⁵ Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

mayo de 2018 (fs. 9-18), mismo que ordenó condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. La sentencia cobró ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 p. m.), del 31 de mayo de 2018, según constancia secretarial (f. 77).

También conforman el título ejecutivo complejo, los siguientes documentos:

- Copia de la liquidación de costas efectuada por la Secretaría del Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja de 19 de noviembre de 2018 (f. 7)
- Copia del auto de 22 de noviembre de 2018, proferido por este Estrado Judicial a través del cual se aprobó la liquidación de gastos ordinarios realizada por la Secretaría del Despacho, por un valor de \$412.769 (f. 6)

De lo anterior, se puede extraer que el título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que el llamado a responder es el señor Darío Fernando Díaz Martínez, como parte vencida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 3333 004 2015 00196 00.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

Respecto al requisito de **claridad** de la obligación exigido por el artículo 422 del CGP, es pertinente advertir que una obligación es ejecutivamente clara, porque en el documento constan todos los elementos que la conforman o le dan entidad, es decir, se conoce quién es el deudor, quién el acreedor y lo debido, esto es, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama; se trata de una obligación **expresa**, o sea enunciada de modo inconfundible, en el documento que sirve de título, y **exigible**, porque no está sujeta a plazo o condición, lo que permite reclamar su cumplimiento.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor de INDEPORTES Boyacá y a cargo del señor Darío Fernando Díaz Martínez, originada en la sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, que condenó a la parte vencida al pago de las costas de

segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 3333 004 2015 00196 00, en el siguiente sentido:

“Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte recurrente por haberse resuelto de manera desfavorable su apelación y por cuanto en el expediente aparece que se causaron, de conformidad con lo previsto en el ordinal 8 del Artículo 365 del CGP.”

De lo anterior, se advierte que en la sentencia se imputa al señor **Darío Fernando Díaz Martínez** una obligación clara y expresa, toda vez que se efectuó la liquidación por parte de la Secretaría de este Despacho, posteriormente aprobada mediante auto de 22 de noviembre de 2018 por un valor de \$ 412.769.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el artículo 305 del CGP establece que podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas. En este orden, comoquiera que la decisión en mención cobró ejecutoria el 31 de mayo de mayo de 2018 (f. 77), se establece que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente, por cuanto en sentencias en las que fue condenado un particular, la norma especial – CPACA- no estableció un plazo específico para procurar el recaudo del valor de la condena, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia.

De la liquidación de costas y gastos del proceso

La providencia objeto de recaudo, ordenó condenar en costas de segunda instancia a la parte accionada, de conformidad con lo previsto en el ordinal 8 del artículo 365 del CGP.

Revisada la liquidación efectuada por la Secretaría de este Estrado Judicial el 19 de noviembre de 2018, aprobada a través de auto del día 22 de ese mismo mes y año, se observa que se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
AGENCIAS EN DERECHO DE SEGUNDA INSTANCIA (Se fijó el 0.5% de las pretensiones negadas en la sentencia) a favor de la entidad demandada	\$ 412.769
TOTAL GASTOS DEL PROCESO	\$ 412.769

De lo anterior, se concluye que se tuvieron en cuenta las disposiciones de la sentencia base del recaudo.

En este orden, se actualizará el valor de las costas reconocidas, liquidadas y aprobadas en el título ejecutivo complejo, comoquiera que la parte demandante así lo solicitó en el numeral 2 de la demanda.

Así las cosas, se aplicará la variación anual del IPC certificado por el DANE, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha del mandamiento de pago.

Por lo antes expuesto, el Despacho considera adecuado precisar que la suma adeudada por concepto de costas y/o gastos ordinarios del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2015-00196, deberá ser indexada a partir del 01 de junio de 2018 (día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia), y hasta la fecha (13 de septiembre de 2019)

$$R = Rh \quad * \quad \frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}}$$

Rh= \$412.769 (valor liquidación gastos ordinarios del proceso o costas)

Índice final= 103,03

Índice inicial= 99,16

$$R = \$412.769 * \frac{103,03}{99,16}$$

$$R = \$428.878,48$$

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el señor Darío Fernando Díaz Martínez debe a INDEPORTES Boyacá, por concepto de pago de costas procesales indexadas hasta la fecha de la presente providencia, el valor de \$428.878,48, siendo esta suma por la cual se ordenará librar mandamiento de pago ejecutivo.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Tunja,

RESUELVE

Primero.- Librar mandamiento de pago a favor del Instituto Departamental del Deporte de Boyacá contra Darío Fernando Díaz Martínez por el valor de

cuatrocientos veintiocho mil ochocientos setenta y ocho pesos con cuarenta y ocho centavos (\$428.878,48).

Segundo.- Notificar personalmente del contenido de esta providencia al señor **Darío Fernando Díaz Martínez**, en los términos señalados en los numerales 3 y subsiguientes del artículo 291 del CGP, de conformidad con la remisión normativa contienda en el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011. Carga que le corresponderá a la parte demandante.

Tercero.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

Cuarto.- Notificar del contenido de esta providencia a la parte demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del CPACA.

Quinto.- Los gastos procesales que generará la práctica de la notificación personal, correrán a cargo de la parte interesada. Por consiguiente el apoderado de la parte accionante dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este auto, deberá retirar y remitir los oficios a quienes van dirigidos previa elaboración de los mismos por parte de la Secretaría. Surtido lo anterior, deberán ser entregadas en el Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, las constancias de envíos y/o radicación para ser incorporadas al expediente.

Sexto.- Conceder a la parte demandada, el término de cinco (5) días para que dentro de ellos efectúe el pago de la obligación por la cual se le ejecuta, conforme lo señala el artículo 431 del CGP. Dicho término comenzarán a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

Séptimo.- La parte demandada, cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del CGP, se reitera que este término, comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

Octavo.- Reconocer personería jurídica para actuar como apoderada de INDEPORTES Boyacá a la abogada Andrea carolina Chacón Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.100.959.001 de San Gil y Tarjeta Profesional No 242.842 del C.S.de la J, en los términos del poder obrante a folio 73.

Notifíquese y cúmplase

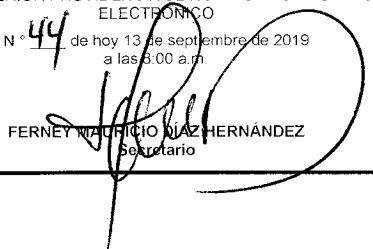

ÁNGELA MARÍA JOJOA VELASQUEZ
Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO

N° 44 de hoy 13 de septiembre de 2019
a las 3:00 a.m.


FERNET MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

⁶ AMRS

⁶ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 13 de septiembre de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Fernet Mauricio Díaz Hernández – Secretario